



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE 20888/2021

“SULPROM S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

En autos SULPROM SA impugna la Resolución 1.863E/2021 del 23/06/2021 que determinó la existencia de deuda por diferencias en las contribuciones ingresadas por los periodos mayo 2010 a noviembre 2016 por la suma de \$ 18.248.691,83 en concepto de capital, \$ 31.364.711,23 por intereses y \$ 12.337.679,64 por lo que considera un incorrecto encuadre de la rubrada en el Decreto N° 814/2001, durante los periodos señalados.

Concretamente la apelante sostiene que cumplió en legal forma con la alícuota impuesta por decreto 814/2011 pues nunca superó los límites de facturación impuestos por la SEPYME y que la pretensión del organismo se basa en una interpretación tendenciosa y estática de la cuestión pues el reclamo que se le efectúa parte de un concepto de pequeña y mediana empresa contrario a la realidad económica y social de nuestro país. A su juicio el reclamo es improcedente además la multa patrimonial impuesta no cuenta con base objetiva. Solicita se habilite la instancia judicial a fin de analizar lo resuelto en sede administrativa. Ofrece un seguro de caución y acompaña documentación que acreditaría la imposibilidad fáctica de cumplir con la regla solve et repete.

La demandada rechaza la apelación presentada argumentando que los agravios vertidos no son más que una disconformidad con lo decidido en el ámbito administrativo pero que en realidad no hay agravios concretos pues en ningún momento se demostró que la aplicación efectuada de la norma fuera incorrecta, pues los datos que surgen de la documental aportada por la propia impugnante demuestra a las claras que las ganancias obtenidas superan el límite de \$48.000.000 a que se refiere la disposición legal que entiende aplicable.

Entiendo que corresponde proceder a la habilitación de la instancia judicial pues en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete se ha considerado congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica. No obstante pero el imperativo legal ha sido atenuado en aquellos casos en que existe una importante desproporción entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

capacidad económica o estado patrimonial (CSJN, 21/12/89, “Micrómnibus Barrancas de Belgrano”, Fallos 312:2490; 11/6/98, “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda c/DGI”, Fallos 312:1741: 2/8/05, “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP”, Fallos 328:2938) admitiéndose la validez dela presentación de seguros de caución (CSJN, 4/11/08, “Orígenes AFJP SA c/AFIP – DGI”, Fallos 331:2480; CFSS, Sala II, 10/2/21, “Dismet SRL c/AFIP”) que es lo que solicita precisamente la empresa recurrente acompañando informes económico financieros que acreditan su imposibilidad de dar cumplimiento con la regla solve et repete.

Corresponde la apertura de la presente instancia toda vez que el apelante acompañó un seguro de caución (Póliza N° 1.512.197)) emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías SA por la suma de \$ 140.031.400 fin de cumplir con la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento habré de propiciar la confirmación de la resolución recurrida.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo –Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

las parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20% para los contemplados en el inciso a) y del 16% para aquellos que quedaban incluidos en el inciso b).

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414, que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con la apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La parte actora en su escrito de impugnación insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEP y ME) razón por la cual solicita se deje sin efecto la determinación de deuda aplicada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

También solicita se la exima del pago de la multa pretendida pues según entiende la aplicación de una multa exige la acreditación de un hecho típico antijurídico y culpable y, en el caso, de su parte nunca existió culpa ni dolo. Afirma que en el peor de los supuestos podría hablarse de mora en el pago de sus obligaciones fiscales, pero nunca falsificación o adulteración de datos. Concluye, para el supuesto en que no se comparta su postura, solicitando se reduzca el monto de la multa aplicada.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo. El artículo 15 inciso e) de la ley 17.250 tipifica como infracción la presentación de una falsa declaración que se atribuye al contribuyente, aun mediando un vicio de la voluntad, esto es, un error excusable. El artículo 929 del Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente durante el periodo en disputa, reglamentaba la figura de referencia estableciendo que el error de hecho no perjudica cuando existió razón para errar pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable, siendo que la culpa o negligencia del agente consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondieren a las circunstancias de las personas, del tiempo y lugar (conf. Art. 512 del código citado).

En la actualidad se ha establecido que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (ver art. 1.725 Cód. Civ. y Ccial. de la Nación sancionado a partir de la ley 26.994).

Por otra parte, dado que la empresa apelante cotizó una alícuota de contribuciones inferior a la debida, resulta deudora del pago de los intereses compensatorios por la privación en el goce de cierto monto de dinero al que resultaba acreedor el organismo durante el periodo cuestionado.

Sin perjuicio de lo anterior, los decretos 814/01 y 1009/01, así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (mayo 2010 a noviembre 2016) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$156.000) y 10 UMA (\$104.000) respectivamente, CSJN. Ac. 25/2022.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 156.000) y 10 UMA (\$ 104.000) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.25/2022).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Disiento con el voto de la Dra. Dorado.

SULPROM S.A. apela la resolución RESOL-2021-1863-E- AFIP-DEIMPR#SDGTLSS, que no hace lugar a la impugnación interpuesta por la contribuyente contra las Actas de Inspección e Infracción labradas bajo la Orden de Intervención N° 1.789.636 ratificando la deuda determinada por contribuciones, intereses y multa por las posiciones 05/2010 a 11/2016, atinente a la aplicación del Decreto 814/2001

La apelante no efectúa el depósito previo de la deuda cuestionada (conf. art. 15 de la ley 18.820). Alega imposibilidad de oblarlo, adjuntando documentación en tal sentido. La improcedencia de tal requisito legal, respecto de la multa. Ofrece seguro de caución emitido por la compañía de seguros Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.(ACG SURA), por \$140.031.400

En la nota de elevación a esta Cámara, la AFIP señala que la recurrente acompaña copia de Póliza de seguro de caución N° 1512197 emitida a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. en garantía como sustitución de pago previo de la obligación depósito previo previsto en el art. 15 de la Ley 18.820, ad 12 de la Ley 21.864 (modificada por la Ley 23.659) y art. 26 de la Ley 24.463, por la suma de \$ 140.031.400,00. Destaca que el equipo de fiscalización actuante, al ser requerido para practicar la reliquidación de los montos adeudados, notificó al responsable mediante acta obrante a fs. 192 y demás formularios, la deuda actualizada en concepto de contribuciones patronales hasta alcanzar la suma de \$ 64.134.207,62 en concepto de capital e intereses y \$ 12.337.679,64 en concepto de multa.

Así lo señalado, considero que la presentación de la póliza de caución constituye un sucedáneo válido del recaudo del depósito previo de la deuda cuestionada (conf. criterio Alto Tribunal “Orígenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sent del 04/11/2008), por lo que en resguardo del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

derecho de defensa del apelante se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

El apelante cuestiona la deuda impuesta, en cuanto el organismo recaudador emplea un monto de facturación máximo determinado en el año 2001, esto es la suma de \$48.000.000 en atención a lo dispuesto por el Decreto 814/01, la Resolución N° 24/01, el Decreto N° 1009/01, sin contemplar las actualizaciones establecidas al respecto por la Secretaria de Pequeña y Medianas Empresas (SPyME),Resoluciones N° 675/2002,N° 50/2013,N° 357/2015,N° 11/2016,103-E-/2017.En función de esta última normativa, sostiene, por los periodos fiscales 5/2010 a 11/2016 debe tributar a los subsistemas de la seguridad social la alícuota del 17% conforme su categorización como P.Y.M.E. por la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, por lo que lo resuelto por la AFIP vulnera su derechos y garantías de raigambre constitucional, en particular los consagrados en los artículos 14,16,17,19,28 y 33 de la Constitución Nacional.

Describe los importes de las ventas netas por el periodo de cargo y los topes fijados por las Resoluciones, reflejados en un cuadro, lo que demuestra a su ver, que el promedio de ventas en ningún período analizado superó los topes dispuesto por la Secretaria ut supra citada.

Analiza la normativa especialmente las sucesivas Resoluciones que incrementan los valores correspondientes a la pequeña y mediana empresa. Ratifica que SULPROM S.A. es una Empresa Mediata Tramo 1 (conforme certificado MIPYME que acompaña. Refiere la jurisprudencia habida en la materia.

Cuestiona, asimismo, la multa impuesta, por considerarla irrazonable y en subsidio peticiona se considere multa por mora.

El organismo, por su parte, ratifica el procedimiento incoado. Analiza lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, el Decreto N° 1009/01,la Resolución General N° 1095/01

Afirma que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyME N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Sostiene que las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación.

Destaca que con ese fin, la Resolución SPyME N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividad (entre ellas, servicios y comercio), define el concepto de “ventas totales anuales”, establece parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos (que luego fueron elevados por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06).

Alega que el concepto de PyME “a los efectos la determinación de la alícuota de contribuciones patronales” es el que surge del Decreto N° 1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01. Sostiene que salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

En síntesis, afirma, el límite de \$48.000.000 es la definición de PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 a los efectos de la aplicación de su similar N° 814/01 y, en virtud de ello, todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" cuyas ventas totales anuales superen los \$48.000.000 debe tributar conforme a la alícuota del 21%.

Concluye que las ventas totales anuales de la rubrada la colocan dentro de los empleadores previstos en el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 814/01, siendo así ajustados a derecho los cargos intimados en autos, los que deben ratificarse. Ratifica la multa e intereses.

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyME.

Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores. En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013 , 357/2015 , 11/2016 , 103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformada por la ley 27430. Asimismo, la ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

En razón de ello, el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

Así lo señalado, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68 CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos 323:1557.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa” sent. Del 4 de septiembre de 2018 se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$2.600.000 (valor UMA \$ 10.400 conf. Acordada 25/2022). Respecto a la dirección letrada de la parte demandada, estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$ 2.600.000 –dos millones seiscientos mil pesos - (conf. Acordada 25/2022), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. C.S.J.N. en el fallo “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. Del 16.06.03 Fallos 316:1533). Con respecto a los correspondientes a la representación letrada de la parte demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Juan Fantini.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 2º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 3º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$ 2.600.000 –dos millones seiscientos mil pesos - (conf. Acordada 25/2022), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. C.S.J.N. en el fallo “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. Del 16.06.03 Fallos 316:1533). Con respecto a los correspondientes a la representación letrada de la parte demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

Fecha de firma: 21/12/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35966456#336711336#20221212141935040



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

